

C.A. de Santiago

Santiago, tres de diciembre de dos mil veintiuno.

Al escrito folio 23, estése a lo que se resolverá.

**VISTO:**

Se reproduce la sentencia en alzada, de veintiocho de abril de dos mil veinte, previa eliminación del guarismo: “\$12.000.000” contenido en la última parte del considerando vigésimo noveno.

**Y se tiene en su lugar y, además, presente:**

**A. En cuanto a la apelación de la parte demandante:**

**Primero:** Que conforme se desprende del fallo del a quo, y particularmente de los principales escritos de la litis, los hechos de la pretensión de la actora, en lo medular, no han sido discutidos por la demandada, lo que permitió que la actividad procesal de aquella estuviera dirigida a demostrar la existencia del daño moral cuyo resarcimiento persigue.

Por su lado, la estrategia de la demandada estuvo encaminada a establecer la inexistencia de aquella obligación por haberse extinguido como consecuencia tanto del pago (reparación satisfactoria) como por la prescripción, además de controvertir el quantum indemnizatorio.

**Segundo:** Que, enseguida, cuestiona la demandante y recurrente el monto de la indemnización que le corresponde, lo que hace necesario considerar las aflicción y padecimiento que derivan del hecho de haber sido la actora víctima de tortura y diversos vejámenes, conforme al reconocimiento hecho por el Estado de Chile de esa calidad, así como de la prueba testimonial rendida e informe psicológico y particularmente de la contestación de la demanda y del escrito de apelación, que dan cuenta del reconocimiento de tales hechos.

Respecto del *quantum* del detrimento, su determinación resulta compleja si se considera que ningún monto hará desaparecer el daño, resarcirá completamente al ofendido, ni restablecerá la situación anterior al acaecimiento de los hechos. Al respecto, la doctrina ha sido conteste en cuanto a que la indemnización por daño moral es meramente satisfactiva,



lo que viene a significar que con ella se pretende una ayuda o auxilio que le permita a la víctima atenuar el daño. Por ello, la indemnización no constituye una pena, de manera que en este contexto cabe, entonces, considerar los esfuerzos que el Estado ha hecho, que se han extendido más allá de lo meramente patrimonial.

**Tercero:** Que, en la especie, no se encuentra controvertida la conducta ilícita en la que se hace sustentar el perjuicio moral alegado, consistente en que en el mes de septiembre de 1973, doña Adriana Mercedes Pérez Aguilera fue detenida sin motivo legal por personal de Carabineros de Chile en una Comisaría de la comuna de San Miguel, lugar donde fue retenida contra de su voluntad, golpeada y abusada sexualmente por agentes de dicha institución.

Que el año en que ocurrieron los hechos precedentemente singularizados, doña Adriana Mercedes Pérez Aguilera tenía 25 años de edad.

Que los hechos descritos en lo que precede, le produjeron a doña Adriana Mercedes Pérez Aguilera un grave daño psicológico.

**Cuarto:** Que al respecto además, cabe consignar que para determinar la responsabilidad extracontractual del Estado de Chile en la detención ilegal, y apremios físicos y psicológicos infligidos a la actora, la juez del grado al analizar la prueba puesta en su conocimiento tuvo primeramente en consideración el informe psicológico elaborado por el psicólogo clínico Cristián Vilches Guerra, que vino a dar cuenta que la Sra. Adriana Pérez Aguilera, presenta las secuelas propias que se pueden observar de aquellas víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y que estas han afectado su salud física y emocional.

Asevera que doña Adriana tuvo que proyectar su desarrollo debiendo asumir los traumas que conllevó su situación, atendido que tuvo que desenvolverse un mundo traumatizante y asumir un microclima familiar que fungió desintegrado, que debió asumir no solo el trauma propio sino que el de su familia, esta situación repercutió en sus dinámicas interpersonales, viéndose afectada su salud emocional durante un extenso período de tiempo.



Al verse expuesta a los abusos que se describen en lo que precede implico que se encontrara expuesta y ello dificultara sus futuras relaciones, tanto en el seno familiar como en lo social, debiendo asumir por ello el costo de diversos traumas.

Todo lo expuesto además, según el propio perito, implicó que se viera dificultada de manera crónica y permanente su salud física y psíquica.

Alude a que de acuerdo a la literatura especializada para este tipo de casos y por ser crónicas las afectaciones existe un grado de irrecuperabilidad del daño, que están asociadas al padecimiento de diversas enfermedades y afectaciones que estarían relacionadas con los eventos vividos.

Por su parte, la testigo doña Adela del Carmen Rabanal indicó que se generó un trauma en la demandante, que la habría dejado de ver un tiempo y que actualmente se le ve mal.

Que también prestó declaración la testigo doña María Eugenia Escalona Reyes, quien en lo sustancial revela que la demandante ha adquirido diversas enfermedades, que tiene ceguera y diabetes. Que su estado de salud es atribuible a los golpes que recibió y los efectos psicológicos que le produjeron.

**Quinto:** Que habiéndose demostrado la existencia del perjuicio, se acudirá a la entidad y gravedad del acto que constituyó la causa del daño para proceder a la estimación del mismo; cuantificación que se hará prudencialmente por el tribunal, habida consideración de su naturaleza, entidad y extensión, teniendo especialmente presente las circunstancias particulares de la actora, pues no puede desatenderse las adversidades que debió enfrentar tras los vejámenes sufridos y provocados por agentes del Estado, por ello la suma fijada por la sentencia de primer grado no aparece debidamente justificada, atendiendo especialmente la naturaleza inmaterial del perjuicio, conforme a los criterios y cuantías que en general se han ido otorgando en casos similares fallados por los Tribunales Superiores. Es por ello que corresponderá otorgar una indemnización que satisfaga las pretensiones legítimas de justicia y los compense por el mal causado, sin desconocer que por la envergadura del mismo y la forma en



que se produjo, este último objetivo resulta casi imposible, pero servirán para fijar su quantum, las características de la detención ilícita, la extensión de la misma y a los antecedentes actuales de trastornos o secuelas significativas provenientes de ese trance, y a las características particulares de las repercusiones en la vida de la víctima producto de los hechos ilícitos, conforme se explicita en la sentencia apelada.

**B. En cuanto a la apelación del demandado Estado de Chile representado por el CDE:**

**Sexto:** Que las alegaciones de la demandada -reparación y prescripción- si bien es cierto fueron desestimadas en extenso por la señora Magistrada, conforme a los argumentos consignados en su sentencia y que esta Corte comparte en su integridad, sin perjuicio de no haberse emitido pronunciamiento al respecto en lo resolutivo por la juez a quo. No obstante ello, estos tópicos resultan nuevamente cuestionados en la apelación, pero habrá de remitirse a los raciocinios consignados en la decisión rebatida, de manera que la revisión que se ha planteado vía apelación de los mismos, no es posible que prospere.

**Séptimo:** Que asimismo, esta Corte comparte los argumentos esgrimidos en la sentencia del grado, por las que fueron rechazadas la excepción de reparación satisfactiva y la excepción de prescripción, conforme se ha razonado en los considerandos decimo al vigésimo tercero, las que se darán por reproducidas y en consecuencia, se tendrán como parte de este fallo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, **se confirma** la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, con **declaración** de que:

I. Se **rechazan** las excepciones de reparación satisfactiva y prescripción opuestas por el demandado;

III. **Se eleva** la indemnización por daño moral a la suma de \$ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para doña Adriana Mercedes Pérez Aguilera; monto que será satisfecho de la manera que estatuye la aludida sentencia en el considerando vigésimo noveno.

**Regístrese y comuníquese.**



**Redacción del Ministro (S) Alberto Amiot.**

**N°Civil-904-2021.**

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Lilian Leyton Varela e integrada por el Ministro (S) señor Alberto Amiot Rodríguez y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández. No firma el Ministro (S) señor Amiot por haber terminado su suplencia.



Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, tres de diciembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a tres de diciembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

